575

22 noviemhre

2001

Advertencia de La
Arias, Inconstitucionalidad
F~brega, en

F~brega

Firma Forense
&

Econo-
advierte la

representaci6n

de

Finanzas,

S.A.,

del

inconstitucionalidad

ArUculo N036 de la Ley N059

Concepto.
de 1996,

de

29 de julio

quejas

dentro

de las

presentadas par Melva Beitia
Morales,

Dan a

Espitia

Rodriguez

y otros

ante la

Superintendencia de Seguros y
Reaseguros.

Sefiora Magistrada Presidenta
Suprema de

de la Corte

Justicia.

En virtud del traslado que nos ha corrido esa Augusta

Corporaci6n de Justicia, visible
expediente,

a foja 34 del

nos corresponde emitir concepto
con la

en relaci6n

Advertencia de Inconstitucionalidad,
par la Firma

interpuesta

Forense Arias, F~brega & F~brega,
articulo N036

respecto al

de la Ley N059 del 29 de julio de 1996,
las Quejas

dentro de

presentadas par Melva Beitfa Morales, Dana Espitia Rodriguez

y otros, ante la Supeninendencia de Seguros y Reaseguros.

Nuestra intervenci6n, la fundamentamos
el articulo

en

2563 del C6digo Judicial, en concordancia con el
literal b,

del articulo 5 de la Ley N038 de 31 de julio de 2000,
que

aprueba el Estatuto Org~nico
Procuradurf a de la

de la

Administraci6n,
Administrativo

regula

el

Procedimiento

i.

General y dicta disposiciones especiales.

I. El acto cuya Inconstitucionalidad se advierte.

.1

2

Conforme llevamos expresado, la pretensión de Inconstitucionalidad se circunscribe al inciso final del artículo 36 de la Ley N059 de 29 de julio de 1996, que es del tenor literal siguiente:

"Artículo 36: Los clientes de los bancos privados y estatales, compañías financieras, fiduciarias, crediticias y de agencias de automóviles, tendrán la libertad para elegir y designar a sus compañías de seguros y a sus corredores de seguros (personas naturales o jurídicas) en aquellas transacciones donde se requiere la contratación de cualquier tipo de seguro.

Los clientes de las instituciones antes mencionadas también podrán optar libremente, por ingresar con el corredor de su preferencia a los seguros colectivos que estas instituciones tengan en vigor, o presentar equivalente de seguros individuales. En ningún momento podrá condicionarse el enrolamiento en dichos seguros a recargos o condiciones especiales en perjuicio del asegurado.

La Superintendencia dejará sin efecto cualquier disposición contraria a lo dispuesto en este artículo. (El resaltado es nuestro)

II. Disposiciones constitucionales que se consideran infringidas y los conceptos de violación.

*1-

A juicio del demandante, las normas Constitucionales que se consideran vulneradas son las siguientes:

"Artículo 2: El poder público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de las Órganas Legislativos, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración."

La presunta infracción del artículo transcrito, la expone el accionante de la siguiente manera:

I,

3

"El último inciso del artículo 36 de la Ley 59 de 29 de julio de 1996 (en

adelante 'la Ley 59'), al otorgar a un ente administrativo como lo es la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la facultad de dejar sin efecto actos que contrarfen lo dispuesto en dicho artículo, viola la citada norma constitucional, pues le atribuye al mencionado ente administrativo una función claramente jurisdiccional. (Cf. f. 29)

El artículo 207 de la Constitución Política Nacional, que a la letra establece:

"Artículo 207: Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley; pero los inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos al revocar a reformar, en virtud de recursos legales, las resoluciones proferidas por aquellos."

Al explicar el concepto de la violación, el accionante en lo medular señala lo siguiente:

"La atribución de competencia a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros para decretar nulidades, consignada en el último inciso del artículo 36 de la Ley 59, claramente

4

atenta contra el principio de independencia del Órgano Judicial plasmado en el artículo 207 de la Constitución Nacional, y contra su importante característica de la exclusividad de la función jurisdiccional en manos del Órgano Judicial." (Cf. f. 31)

Examen de constitucionalidad.

Corresponde a esta Procuraduría, exponer su criterio u opinión, respecto a la controversia jurídica constitucional en estudio, previa exposición del acto acusado de

~1

'..

ti

4

inconstitucional y de la disposición supuestamente infringida y su concepto, el cual externamos de inmediato:

Esta Procuraduría, no comparte los argumentos jurídicos planteados por el demandante, quien pretende que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, declare la Inconstitucionalidad del último inciso del artículo 36 de la Ley N059 de 29 de julio de 1996, que reza así: "La Superintendencia dejará sin efecto cualquier disposición contraria a la dispuesto en este artículo" por las siguientes razones:

El artículo 2 de la Constitución Política Nacional consagra el clásico principio de la separación de los poderes del Estado, a través del cual, las funciones de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial son ejercidos separadamente pero en armónica colaboración entre sí.

La tesis del actor de que la potestad de decretar la nulidad de actos privados constituye el ejercicio de una función netamente jurisdiccional, no atiende las innovaciones actuales, que hacen referencia al poder sancionador de la Administración, insertas en el artículo 36 de la ley 59 de 29 de julio de 1996, las cuales, precisamente para tratarse de una ley especial, que reglamenta las entidades aseguradoras, administradoras de empresas y corredores ajustadores de seguros, así como la profesión de corredor de seguros, son perfectamente aplicables, ante cláusulas y acciones contractuales como el caso que motiva la presente advertencia de inconstitucionalidad, donde se profiere a delimita la libertad de escoger a la compañía de seguros y a sus corredores. El dejar sin efecto cualquier disposición

.5.

5

contraria a lo dispuesto en el artículo 36 in comento, no significa que se vulnere el principio receptado en el artículo 2 de la Constitución Política Nacional, de la separación de los poderes públicos, así como tampoco la función jurisdiccional de administrar justicia.

A fin de que exista libertad en la acción pública, es necesaria respetar la autonomía e independencia de la Administración y su libre actividad, sin descuidar lo que establece el principio de la separación de los poderes públicos.

El Licenciado Luis Fuentes Montenegro, en relación con el artículo 2 in examine, nos comenta lo siguiente:

"Al consagrar el principio de la separación de los poderes, el mismo no debe contemplarse dentro de una concepción absoluta a con una rigidez extrema.

La separación del poder público, manifiesta un carácter relativo, pues el Estado hoy día, tiene que hacerle frente a nuevas y múltiples

realidades." (Fuentes Montenegro, Luis, Constitución Política de la República de Panamá, Edición 1993, Publicaciones Jurídicas de Panamá)

Por su parte, Rafael Bielsa, en su obra Derecho Administrativa al referirse a la actividad jurisdiccional de la Administración, nos comenta:

"Na es, pues, acta jurisdiccional la decisión par la cual el Pader administrador rescinde un contrato, a declara la caducidad de un derecho a deniega una solicitud de jubilación, a revoca una ya acordada. En esos casos el contratista, a titular del derecho a el que se considera con derecho a la jubilación, respectivamente, si consideran ilegal el acto, pueden

—